

*República de Colombia  
Rama Judicial*



*Tribunal Administrativo del Valle del Cauca*

Santiago de Cali, noviembre veintitrés (23) de dos mil veinte (2020).

Auto Interlocutorio No. 277

ACCION: DE CUMPLIMIENTO  
DEMANDANTE: GUILLERMINA PERLAZA HINESTROZA  
[guillermina.perlaza@gmail.com](mailto:guillermina.perlaza@gmail.com)  
DEMANDADA: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN  
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS- UARIV  
[notificaciones.juruducauariv@unidadvictimas.gov.co](mailto:notificaciones.juruducauariv@unidadvictimas.gov.co)  
RADICACION: 76001-23-33-000-2020-01455-00  
ASUNTO: INADMITE DEMANDA

MAGISTRDO: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

La señora GUILLERMINA PERLAZA HINESTROZA, en ejercicio del medio de control de cumplimiento consagrado en el artículo 146 del CPACA y la Ley 393 de 1997, demanda a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS- UARIV, con el fin de que se dé cumplimiento a las siguientes disposiciones, sentencias y actos administrativos:

- Leyes 387 de 1997, 1448 de 2011 arts. 3, 25, 27, 132 y 156, y sus Decretos Reglamentarios 4800 de 2011, 1377 de 2014 y 1084 de 2015.
- Sentencias SU 254 de 2013 y T-025 de 2004, así como los autos de seguimiento 092 de 2008 y 149 de 2020 de la Corte Constitucional, y
- Resoluciones 090 de 2015, 01958 del 6 de junio de 2018 art. 15, 01049 del 15 de marzo de 2015 art. 20 y 1305 del 28 de marzo de 2019, dictadas por el Director General de la UARIV.

En razón de lo anterior, solicita se le conceda fecha cierta para el pago de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado que le fue concedida como uno de los derechos que le asiste a la actora y su familia, así como la atención y reparación integral, y que la UARIV le brinde información clara, completa, veraz y oportuna con la data del pago de la misma.

Lo solicitado lo hace poniendo de presente que desde el año 2017 ha venido pidiendo a la entidad, no solo en sede administrativa sino judicial mediante acción de tutela, el reconocimiento y pago la indemnización, recaudándosele en varias oportunidades juramento, entrevistas, actualización de datos y la recepción de diferente documentación, sin que hasta el momento cuente con fecha cierta

para el pago.

Previo a resolver se realizan las siguientes:

### Consideraciones

La acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, propende por la materialización efectiva de aquellos mandatos contenidos en leyes o en actos administrativos, a efectos de que el Juez de lo Contencioso Administrativo le ordene a la autoridad que se constituya renuente, proveer al cumplimiento de aquello que la norma prescribe.

Es un mecanismo procesal idóneo para exigir el cumplimiento de las normas o de los actos administrativos, pero al igual que la acción de tutela es subsidiaria, en tanto que no procede cuando la persona que promueve la acción tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o del acto incumplido; tampoco cuando su ejercicio persiga el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

La Ley 393 de 1997, en sus artículos 1º y 10º desarrollan el objeto de la acción y los aspectos a tener en cuenta en la presentación y trámite de la misma. Veamos:

*"(...) ARTICULO 1o. OBJETO. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos.*

*(...)*

*ARTICULO 10. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. La solicitud deberá contener:*

*1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción.*

***2. La determinación de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido. Si la Acción recae sobre Acto Administrativo, deberá adjuntarse copia del mismo.** Tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia.*

*3. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento.*

*4. Determinación de la autoridad o particular incumplido.*

***5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del inciso segundo del artículo 8º de la presente Ley, y que consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva.***

*6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer.*

*7. La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. (...)" (Negrilla del Despacho).*

No obstante lo anterior, revisado el plenario considera el Despacho que el presente trámite debe ser inadmitido, como quiera que de su revisión se advierten las siguientes falencias a corregir:

1. Falta de determinación de la norma incumplida.

Si bien el libelo expresa taxativamente como normas con fuerza material de ley o actos administrativos incumplidos: **i)** las Leyes 387 de 1997, 1448 de 2011 arts. 3, 25, 27, 132 y 156, y sus Decretos Reglamentarios 4800 de 2011, 1377 de 2014 y 1084 de 2015, **ii)** Sentencias SU 254 de 2013 y T-025 de 2004, así como los autos de seguimiento 092 de 2008 y 149 de 2020 de la Corte Constitucional, y **iii)** Resoluciones 090 de 2015, 01958 del 6 de junio de 2018 art. 15, 01049 del 15 de marzo de 2015 art. 20 y 1305 del 28 de marzo de 2019, dictadas por el Director General de la UARIV; en primer lugar, la actora **deberá indicar con claridad y de manera específica las normas incumplidas para su examen**, no solo refiriendo genéricamente la Ley 397 de 1997 o los Decretos Reglamentarios 4800 de 2011, 1377 de 2014 y 1084 de 2015, sino que frente a estos debe señalar los artículos desconocidos por la accionada, en tanto a lo largo de su contenido los mismos versan sobre una serie de trámites y etapas a surtir en diferentes actuaciones.

Sumado a ello, **debe también excluir de sus pretensiones el cumplimiento de las Sentencias SU 254 de 2013 y T-025 de 2004, así como los autos de seguimiento 092 de 2008 y 149 de 2020 de la Corte Constitucional**, por cuanto, atendiendo el contenido del artículo 87 de la Constitución Política, reglamentado por la Ley 393 de 1997, esta vía constitucional está consagrada exclusivamente, se itera, “...para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”, no siendo procedente entonces verificar este tipo de providencias.

Igualmente, **debe aportar copia de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones 090 de 2015, 01958 del 6 de junio de 2018, 01049 del 15 de marzo de 2015 y 1305 del 28 de marzo de 2019, dictadas por el Director General de la UARIV**, conforme lo establece la norma.

## 2. Falta de renuencia a la UARIV

Por otra parte, a la demanda se acompañó documento con referencia “*RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 04102019-96405 del 11 de diciembre de 2019*”, fechado 5 de marzo de 2020, donde la accionante le solicita a la UARIV revocar el acto citado y concederle fecha cierta para el pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado; sin embargo, a juicio del Despacho, ello no constituye en renuencia a la entidad accionada frente al cumplimiento de alguna de las norma enlistadas, toda vez que en el escrito no se especifica, aunado a que la solicitud corresponde a la interposición de unos recursos contra un acto proferido por la entidad, decisión con la que la actora no está de acuerdo.

Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 12 de mayo de

2016 precisó como requisitos mínimos que debe tener la petición por medio de la cual se constituye en renuencia:

*"El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: **La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.** Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella... **la petición efectuada con el fin de constituir en renuencia debe reunir al menos las siguientes características: la petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento**" (subrayado fuera de texto).*

Bajo el precepto jurisprudencial, dirá el Despacho que los recursos elevados por la parte actora no hacen mención a la solicitud de cumplimiento de alguna de las normas hasta ahora citadas, ni tampoco se indican las razones por las cuales la entidad tiene a su cargo el cumplimiento de algún mandato que establezca el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado concedida, en una fecha cierta.

Por consiguiente, al no allegarse prueba de renuencia establecida como presupuesto de la solicitud de cumplimiento, de conformidad con el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, ni manifestación alguna en el escrito que indique que el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, es del caso inadmitir la demanda para que subsane a su vez este yerro, junto con los demás atrás indicados.

Así las cosas, en virtud del artículo 12º ibídem, por carecer de varios de los requisitos formales para su admisión, esta Colegiatura inadmitirá la presente demanda y ordenará a la solicitante que la corrija en los aspectos señalados, en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de este proveído, advirtiéndole que si no lo hiciere dentro de este término la demanda será rechazada.

En merito de lo expuesto, se

DISPONE:

1.- INADMITIR la demanda de cumplimiento instaurada por la señora

GUILLERMINA PERLAZA HINESTROZA contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS- UARIV.

2.- ORDENAR a la parte actora que corrija su demanda, subsanando los defectos indicados en la parte motiva de esta providencia dentro del término de dos (2) días, so pena de rechazo, a los correos electrónicos [elubob@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:elubob@cendoj.ramajudicial.gov.co), [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co) y [s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co), especificando en el mismo los datos de la referencia.

Notifíquese y Cúmplase

  
EDUARDO ANTONIO LUGO BARROS  
Magistrado